CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELATIVOS AL RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL DE CANARIAS

HELMUTH MOYA MEYER

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(Sala de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife)

I. IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO

A) Reclamaciones económico-administrativas

El Tribunal anula la resolución de la Viceconsejería de Economía del Gobierno Canario por la que se resuelve una reclamación económico-administrativa interpuesta por sanción tributaria en concepto de IGIC. Considera que el conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas contra liquidaciones o sanciones en materia de IGIC corresponde a los Tribunales Económico-Administrativos estatales, pues no se trata de un impuesto autonómico ni un impuesto cedido a la Comunidad Autónoma de Canarias (TSJC, Sala de Las Palmas de Gran Canaria, st. 2.11.2007 y 22.2.2008).

B) Exenciones del impuesto

El Tribunal Europeo de Justicia inadmite la cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, en relación a los efectos que pueda surtir sobre el IGIC la sen-

tencia de 7 de mayo del 1998 en la que el Tribunal de Justicia declaró que el Reino de España había incumplido las obligaciones que le incumbían con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, parte A, apartado 1, letra m, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, al disponer que la exención prevista para prestaciones directamente relacionadas con la práctica del deporte o la educación física sólo se aplicará a las entidades privadas cuyas cuotas de entrada o periódicas no sobrepasen determinada cuantía. El Tribunal considera que el IGIC se encuentra fuera del ámbito del Derecho Comunitario ya que no le es aplicable la Sexta Directiva y, por tanto, sólo tendría competencia para conocer de la cuestión prejudicial si la Ley 20/1991 que regula el impuesto hubiera efectuado una remisión expresa a la Sexta Directiva cosa que no ha acontecido. El hecho de que la regulación del IGIC sea muy similar a la del IVA no permite afirmar que le sea aplicable la citada Directiva ni desconocer que se trata de impuestos de naturaleza distinta (Tribunal

Europeo de Justicia, Sala Octava, st. 16.4.2008).

C) Regularización de la relación jurídica tributaria

No se considera el ingreso extemporáneo infracción tipificada en el artículo 79 a) LGT del 1963 porque se ingresaron las cuotas atrasadas conforme a lo dispuesto en el artículo 61.3. Antes de la entrada en vigor del artículo 27.4 LGT del 2003, no era exigible que las autoliquidaciones extemporáneas indicasen expresamente el período impositivo de liquidación al que se referían. Por tanto, el ingreso de cuotas por IGIC efectuado en el último cuatrimestre del ejercicio del 2000 de cuotas correspondientes a los dos ejercicios anteriores implica una regularización de la relación jurídico tributaria al amparo de lo dispuesto en el artículo 61.3 LGT del 1963 (TSJC, Sala de Las Palmas de Gran Canaria, st. 8.2.2008).

II. INCENTIVOS FISCALES CONTENIDOS EN LA LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO FISCAL DE CANARIAS

Cuando la RIC no se materialice dentro del plazo legalmente establecido o se disponga de ella para fines distintos de los previstos en la ley, o se incumplan de cualquier forma los requisitos establecidos para tener derecho al beneficio, se imputarán los beneficios con los que se dotó al ejercicio en el que se produzca el incumplimiento. Los intereses de demora se calcularán a partir de la finalización del plazo de pago voluntario del ejercicio

en el que se dotó la reserva (TSJC, Sala de Las Palmas de Gran Canaria, st. 8.2.2008).

Los rendimientos producidos por activos financieros sólo pueden emplearse para dotar la RIC cuando estén relacionados con la actividad económica del sujeto pasivo. El Tribunal considera que los intereses percibidos por la entidad demandante por créditos concedidos a sociedades del mismo grupo empresarial no son beneficios relacionados con la actividad económica desarrollada por la misma (TSJC, Sala de Las Palmas de Gran Canaria, st. 22.2.2008).

El Tribunal desestima la alegación de indefensión efectuada por el socio de una sociedad transparente al cual se le practica liquidación por el IRPF, a consecuencia de haberse considerado en otro expediente que la sociedad no podía acogerse a los beneficios de la RIC ya que había dotado la reserva con beneficios que no procedían de actividades empresariales. El socio había otorgado poderes a quien debía representar a la sociedad en las actuaciones inspectoras incoadas por los motivos indicados (TSJC, Sala de Santa Cruz de Tenerife, st. 27.3.2008 y st. 8.5.2008, son firmes).

La sociedad demandante adquirió un inmueble el 27 de julio del 2005, a los pocos días de realizar una ampliación de capital social, acogiéndose a los beneficios fiscales del artículo 25 de la Ley 19/1994. Dicho bien lo arrendó el 1 de enero del 2006, constituyendo el arrendamiento la actividad propia de su objeto social. La Administración tributaria consideró que no se había cumplido con el requisito de la inmediatez en la puesta en

funcionamiento del bien de inversión, lo cual es rechazado por el Tribunal teniendo en cuenta el tiempo que necesariamente ha de mediar entre la oferta del inmueble en arrendamiento y la contratación efectiva del mismo (STJC, Sala de Santa Cruz de Tenerife, st. 16.4.2008, es firme).

El beneficio fiscal previsto en el artículo 25 de la Ley 19/1994 debe cumplir, entre otros requisitos, que la adquisición del bien de inversión se realice dentro de los tres años siguientes a la constitución de la sociedad o a la ampliación de su capital social. Debe estar-se al momento del otorgamiento de la correspondiente escritura pública de ampliación de capital y no al momento en que se ingresan los capitales en el patrimonio de la sociedad. En consecuencia, niega que una adquisición realizada unos días antes de elevarse a escritura pública los acuerdos sociales de ampliación de capital pueda acogerse al citado

beneficio fiscal, aunque el capital ya hubiera sido ingresado en las cuentas de la sociedad con anterioridad (STSJC, Sala de Santa Cruz de Tenerife, st. 25.4.2008, es firme).

El socio de una sociedad que tributa en régimen de transparencia fiscal, a la cual se le había practicado liquidación por el Impuesto de Sociedades por haber dotado la RIC con rendimientos procedentes de la mera tenencia de bienes, puesto que la sociedad no desarrolla actividad empresarial alguna, ya que no tiene, al menos, un local y un empleado, reclama por la atribución de rentas que se efectúa con ocasión de liquidar el IRPF. El Tribunal determina que, habiéndose negado la posibilidad de dotar la RIC con los rendimientos de la sociedad no procedentes de una actividad empresarial, deben imputarse las rentas a los socios (STSJC, Sala de Santa Cruz de Tenerife, st. 29.4.2008, es firme).